


"Sobre el presente documento se elaboró una versión pública, de conformidad al Artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), protegiendo los datos personales de las partes que intervinieron en el presente proceso; así como datos confidenciales, según lo establecido en el Artículo 6 letras "a", "f" y 24 de la LAIP

	TRIBUNAL SANCIONADOR	Fecha: 24/09/2024 Hora: 10:40 Lugar: Distrito de San Salvador	Referencia: 1646-2023
RESOLUCIÓN FINAL			
I. INTERVINIENTES			
Denunciante:	Presidencia de la Defensoría del Consumidor —en adelante Presidencia—.		
Proveedora denunciada:	Megavalores, S.A. de C.V. (NIT:)		
II. HECHOS DENUNCIADOS Y ANTECEDENTES.			
<p>La Presidencia de la Defensoría del Consumidor expuso en su denuncia que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 letra d) de la Ley de Protección al Consumidor —en adelante LPC—, a lo regulado en el artículo 12-A de la Ley Contra la Usura —en adelante LCU—, y como institución encargada de verificar la observancia de lo dispuesto en esta última normativa, en lo que respecta a los proveedores de servicios financieros que no son regulados y/o supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero —en adelante SSF— requirió el inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra de la proveedora, <i>por el presunto incumplimiento a la obligación legal de remitir la información relativa a su actividad crediticia conforme a lo estipulado en el artículo 6 incisos 3° y 4° de la LCU</i>. Dicha proveedora, según documentación agregada al expediente, está registrada en el Banco Central de Reserva de El Salvador —en adelante BCR— bajo el código</p> <p>La denunciante tuvo noticia del supuesto incumplimiento a la obligación prevista en la LCU mediante carta emitida por el Presidente del BCR en fecha 31/01/2023 (folio 6), en la que remitió el listado de los proveedores no supervisados por la SSF que se encontraban registrados en el BCR y que no habían cumplido con la obligación legal de remitir la información relativa a su actividad crediticia correspondiente a los meses de <i>junio a noviembre de 2022</i>, entre los que se encontraba la proveedora denunciada.</p> <p>Finalmente, en la denuncia se indicó que con el documento denominado "<i>Informe de Proveedores no supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero identificados por el Banco Central de Reserva con incumplimiento a la Ley Contra la Usura por no remitir la información de sus operaciones de crédito, 20mo cálculo de Tasas Máximas Legales –TML– vigentes de enero a junio de 2023</i>" (folios 3-5) y su Anexo 1 denominado "<i>Acreeedores No Supervisados por la SSF, que no remitieron la información de las operaciones de crédito de los meses entre junio a noviembre de 2022 al BCR, para el establecimiento del 20mo Cálculo de las</i></p>			

Tasas Máximas Legales” (folio 5 vuelto), se lograba establecer la omisión en qué había incurrido la proveedora denunciada, contraviniendo el inciso 4° del artículo 6 de la LCU, configurándose la conducta tipificada en el artículo 12-B literal d) de la LCU, pues, presuntamente, incumplió con el mandato legal de remitir la información pertinente para el 20mo cálculo de la TML, obstaculizando la labor del BCR.

III. INFRACCIÓN ATRIBUIDA Y ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN.

Tal como consta en resolución de inicio —folios 9 y 10—, se le imputa a la proveedora denunciada la comisión de la infracción establecida en el artículo 12 -B literal d) de la LCU, el cual establece que constituirá infracción administrativa: *“No remitir la información, proporcionar información errónea, inexacta, inconsistente o hacerlo de forma extemporánea al registro de acreedores del Banco Central de Reserva conforme a las normativas técnicas o manuales emitidos por éste”*, conducta que, en caso de comprobarse, implicaría la imposición de la sanción prevista en el artículo 12-C de la misma ley, que señala: *“Las infracciones a la presente ley serán sancionadas con multa, cuyo monto se determinará de conformidad a los criterios establecidos de las disposiciones generales sobre las sanciones administrativas y considerando la siguiente diferenciación: (...) b) Para los acreedores no supervisados, se impondrán las multas por medio del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor hasta los quinientos (500) salarios mínimos vigentes, sin perjuicio de las demás sanciones que puedan determinarse de conformidad a la Ley de Protección al Consumidor”*.

De conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la LCU, las entidades del mercado financiero tales como: bancos, los bancos cooperativos, sociedades y asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que otorgan créditos; así como las personas naturales o jurídicas, tales como: casas comerciales, comerciantes de bienes o servicios y en general a cualquier sujeto o entidad que preste dinero u otorgue financiamiento, incluidas las denominadas casas de empeño, montepíos o similares, *“deberán remitir al Banco Central de Reserva las tasas de interés efectivas y los montos de las operaciones de crédito, de los meses de diciembre a mayo y de junio a noviembre, en los primeros cinco días hábiles de los meses de junio y diciembre, respectivamente. El Banco Central de Reserva informará a quien corresponda de los incumplimientos en esta materia”*, lo anterior en relación a lo regulado en el artículo 17 de las Normas Técnicas para la Aplicación de la Ley Contra la Usura, en adelante NTLCU.

En términos generales y conforme a lo consignado en la letra w) del artículo 3 de la NTLCU, debe entenderse que *“Tasa Máxima Legal: es la tasa de interés máxima que publicará el Banco Central semestralmente para cada segmento de crédito y montos contratados, según lo*

establecido en el artículo 5 de la Ley Contra la Usura, y es equivalente a 1.6 veces la tasa efectiva promedio simple por segmento de crédito y rango de monto”, el resaltado es nuestro.

Dentro de ese contexto, el artículo 12 inciso primero y artículo 12-C literal b) de la LCU — en relación con el artículo 24 de las NTLCU— determina, por una parte, que cuando se trate de entidades supervisadas por la SSF, los incumplimientos serán sancionados por esta última, según la respectiva ley de aplicación y, por otra parte, establece que *los demás sujetos obligados al cumplimiento de la LCU, serán sancionados por la Defensoría del Consumidor, mediante el procedimiento establecido en la Ley de Protección al Consumidor*, consignando en el inciso final que: “(...) la Defensoría del Consumidor sancionará a los acreedores supervisados o no supervisados, según les corresponda, con multa de hasta quinientos salarios mínimos urbanos del sector comercio y servicios, cuando no remitan la información de su actividad crediticia o ésta sea inexacta conforme a las normas técnicas y manuales emitidos por el Banco Central de Reserva”, el resaltado es nuestro.

En ese orden de ideas, el artículo 3 letra k) de las NTLCU define a las *Entidades o Personas No Supervisadas* como: “Todas aquellas entidades o personas, sean naturales o jurídicas, que no están sujetas a supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero; y aquellas que la Ley Contra la Usura nomina como No Regulada (...)”.

Por otra parte, el artículo 9 de las NTLCU establece que: “La remisión de la información correspondiente a cada una de las operaciones de crédito otorgados en el semestre inmediato anterior, deberá realizarse en los primeros cinco días hábiles de los meses de junio y diciembre. No obstante, lo anterior, los acreedores podrán remitir la información mensualmente y el Sistema de Tasas Máximas estará habilitado para recibirla de esta forma. La información deberá ser clasificada en archivos separados por mes.”, el resaltado es nuestro.

Por lo antes expuesto, para determinar la configuración de la infracción regulada en el artículo 12-B literal d) de la LCU, este Tribunal deberá analizar la concurrencia de los siguientes elementos: (i) que la entidad o persona no supervisada se encuentre inscrita en el Registro de Acreedores del BCR; (ii) que la entidad o persona no supervisada se dedique al préstamo de dinero u otorgamiento de financiamiento, cualquiera que sea la forma para hacer constar la operación; y (iii) que la entidad o persona no supervisada **no haya cumplido con la obligación de remitir la información de sus operaciones crediticias** dentro de los primeros 5 días hábiles del mes de junio o diciembre —según corresponda— o de forma mensual —según lo dispuesto en el artículo 9 de las NTLCU—.

La anterior conducta, de llegar a comprobarse, daría lugar a la sanción prescrita en el artículo

12-C literal b) de la LCU, de hasta quinientos salarios mínimos urbanos del sector comercio y servicios.

IV. CONTESTACIÓN DE LA PROVEEDORA DENUNCIADA

I. Se siguió el procedimiento consignado en los artículos 144-A y siguientes de la LPC, respetando la garantía de audiencia y el derecho de defensa de la proveedora Megavalores, S.A. de C.V., quien compareció mediante escrito presentado en fecha 22/04/2024 —fs. 14 y 18—, por medio del licenciado _____ quien actúa en calidad de administrador único propietario y representante legal de la proveedora denunciada, por medio del cual evacuó la audiencia conferida en resolución de inicio, adjuntó prueba documental y ejerció su derecho de defensa, alegando en síntesis lo siguiente:

Que su representada se inscribió como acreedor ante el BCR el día 15 de agosto del dos mil veintidós, por lo que, en tal sentido, la obligación de presentar informe ante el BCR nació desde el día en que se aprobó la solicitud de registro, mas no de los meses de junio y julio del dos mil veintidós. Citando el artículo 12-B literal d) de la LCU que establece: *“No remitir información, proporcionar información errónea, inexacta, inconsistente o hacerlo de forma extemporánea al registro de acreedores del Banco Central de Reserva conforme a las normativas técnicas o manuales emitidos por éste”*, es decir, que esta infracción para su configuración requiere dentro de los elementos de la misma, que su representada haya estado inscrita en el registro de acreedores, previo al período omiso señalado. Sin embargo, tal como se aclaró antes, su mandante no estaba inscrita en los meses solicitados, y que supuestamente da pie a la información alegada.

2. Seguidamente, en fecha 24/04/2024, se recibió escrito firmado por el licenciado _____ de generales ya conocidas (fs. 33), por medio del cual agrega documentación de folios 35 y 36.

V. VALORACIÓN DE PRUEBA/HECHOS PROBADOS

1. De conformidad con los artículos 146 de la LPC y 106 inc. 3° de la LPA, las pruebas oportunas, pertinentes y conducentes aportadas en el procedimiento, serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica; a excepción de la prueba documental, la cual se realizará conforme al valor tasado de la misma en el derecho común.

En ese sentido, la Sala de lo Constitucional en la resolución final pronunciada en el proceso acumulado con número de referencia 23-2003/41-2003/90-2003/17-2005/21-2005, de fecha 18/12/2009, en lo que concierne al valor tasado de las pruebas mencionó: *“Cuando la ‘utilización’ de la máxima de experiencia viene predeterminada por la norma procesal, hablamos del sistema de valoración denominado prueba tasada o tarifa legal; es decir, en la*

prueba tasada o tarifa legal, lo que hace el legislador es proveer una de las máximas que deben integrarse al razonamiento probatorio del juez, como la premisa mayor del silogismo fundamental sobre cada medio de prueba (...) el legislador señala una lista de medios de prueba y a cada una le asigna un determinado y preciso valor probatorio -certeza objetiva-; es decir que, en este caso, amparado en la seguridad jurídica, el legislador determina previamente la máxima de experiencia, aunque con distinta fuerza dependiendo de la prueba de que se trate" (los resaltados son propios).

Dicho esto, el art. 106 inc. 6º de la LPA dispone: "Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario".

Además, el artículo 341 del Código Procesal Civil y Mercantil determina el valor probatorio de los instrumentos, así: "Los instrumentos públicos constituirán prueba fehaciente de los hechos, actos o estado de cosas que documenten; de la fecha y personas que intervienen en el mismo, así como del fedatario o funcionario que lo expide. Los instrumentos privados hacen prueba plena de su contenido y otorgantes, si no ha sido impugnada su autenticidad o ésta ha quedado demostrada. Si no quedó demostrada tras la impugnación, los instrumentos se valorarán conforme a las reglas de la sana crítica" (los resaltados son propios).

Finalmente, el artículo 63 del Reglamento de la LPC, viene a reforzar lo estipulado en el derecho común al establecer: Las actas mediante las cuales los funcionarios de la Defensoría hagan constar las actuaciones que realicen, harán fe, en tanto no se demuestre con prueba pertinente y suficiente su inexactitud o falsedad. El mismo valor probatorio tendrán los informes y otros documentos que emitan los funcionarios y empleados de la Defensoría, en el ejercicio de sus funciones.

2. En el presente procedimiento sancionatorio, se incorporó prueba documental consistente en:

a) Original de "Informe de Proveedores no supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero identificados por el Banco Central de Reserva con incumplimiento a la Ley Contra la Usura por no remitir la información de sus operaciones de crédito, 20mo cálculo de Tasas Máximas Legales -TML- vigentes de enero a junio de 2023" junto con la certificación de Anexo 1 denominado "Acreedores No Supervisados por la SSF, que no remitieron la información de las operaciones de crédito de los meses entre junio a noviembre de 2022 al BCR, para el establecimiento del 20mo Cálculo de las Tasas Máximas Legales", ambos documentos emitidos por la Unidad de Auditoría de Consumo de la Dirección de Vigilancia de Mercado de la

Defensoría del Consumidor de fecha 20 de junio de 2023, por medio de los cuales se establece que la información del incumplimiento fue remitida por el BCR a la Defensoría del Consumidor, a través de un dispositivo de almacenamiento memoria USB Kingston con capacidad de 32 GB, mediante carta de fecha 31 de enero de 2023, identificada con el número 00101, con información digital, la cual contenía un archivo electrónico en formato Excel con el nombre “1 Lista de Acreedores y Reporte de Remisión Información No Supervisados 20mo Cálculo”, dentro del cual se encuentra la hoja electrónica denominada “Reporte Remisión Información”. y en el número 708, de la misma que aparece bajo el campo denominado “Numero correlativo de Inscripción”, se identifica al proveedor conforma al detalle siguiente:

No. correlativo de Inscripción	Tipo Acreedor	Código	Nombre del Acreedor	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	Créditos
708	Jurídico		Megavalores, S.A. de C.V.	N.R.	N.R.	0	0	0	0	0

De igual forma, se estableció con dichos documentos que, en la memoria USB y archivo electrónico antes referido, se incluía una hoja electrónica denominada “Acreedores No Supervisados” en la que se ubicaba a la proveedora denunciada en el campo denominado “Número Correlativo de Inscripción” con el número 708 (fs. 3-5 vuelto).

b) Fotocopia certificada de carta emitida por el Presidente del BCR en fecha 31 de enero de 2023, bajo la referencia “00101”, mediante la cual informa a la Presidencia de la Defensoría del Consumidor sobre los incumplimientos de la proveedora denunciada lo establecido en los artículos 6 y 12-b literal d) de la LCU, adjuntando memoria USB que contiene, entre otros aspectos, el listado de los acreedores no supervisados que no remitieron la información de su actividad crediticia durante el periodo de junio a noviembre de 2022 e impresión de fotografía de memoria USB del cual se extrajo la documentación antes relacionada (fs. 6-8).

Asimismo, la proveedora denunciada, presentó prueba de descargo consistente en:

- a) Copia certificada de solicitud de fecha 16 de abril de 2024, remitida al Banco Central de Reserva, a fin que se indique desde cuando la proveedora Megavalores, S.A. de C.V., está inscrita como acreedor (fs. 30).
- b) Constancia emitida en línea por el Banco Central de Reserva de registro y activación de la proveedora Megavalores, S.A. de C.V., con la que pretende acreditar que la fecha en la que se le registró en el Sistema de Tasas Máximas de la Ley contra la Usura que se lleva en el Banco Central de Reserva, fue el día 15/08/2022, con la que pretende comprobar que no se había generado la obligación de remitir la información y que es a partir de ese mes que le nace la obligación de declarar sus actividades crediticias (fs. 32).

- c) Copia certificada de constancia de registro, emitida por la gerente de estabilidad financiera y políticas públicas del Banco Central de Reserva de El Salvador, con la que hace constar que la proveedora Megavalores, S.A. de C.V., se encuentra registrada en el Sistema de Tasas Máximas de la Ley Contra la Usura desde el 15 de agosto de 2022, con el código de acreedor (fs. 36).

VI. ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN

Al respecto, este Tribunal Sancionador deberá analizar en el caso en particular –según lo establecido en el romano V de la presente resolución–, con el objeto de determinar si la denunciada cumplió o no con la obligación legal de remitir la información relativa a su actividad crediticia, correspondiente a los meses de junio a noviembre del año 2022, conforme a lo requerido en el artículo 6 incisos 3° y 4° de la LCU.

Así, con base en los elementos probatorios señalados en el romano V de la presente resolución, ha quedado comprobado:

a) Mediante la constancia de registro, emitida por la gerente de estabilidad financiera y políticas públicas del Banco Central de Reserva de El Salvador –folio 36– se ha comprobado que la proveedora Megavalores, S.A. de C.V., con Código Único de Acreedor fue registrada en el Sistema de Tasas Máximas de la Ley contra la Usura el día 15/08/2022.

b) Mediante la constancia emitida en línea por el Banco Central de Reserva de registro y activación de la proveedora Megavalores, S.A. de C.V., se logra verificar que la proveedora se encuentra inscrita desde el día 15/08/2022, y que desde ese mes le nace la obligación de reportar la información de su actividad crediticia, reportando a cero los siguientes meses del periodo denunciado (fs. 32).

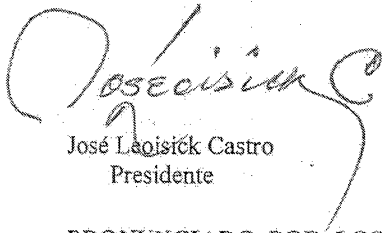
En conclusión, del análisis de la documentación incorporada al presente procedimiento se ha comprobado que la proveedora Megavalores, S.A. de C.V., fue registrada en el Sistema de Tasas Máximas de la Ley contra la Usura el día 15/08/2022; razón por la cual, en ese momento, no estaba obligada a enviar la información de su actividad crediticia correspondiente al periodo comprendido de los meses de junio y julio de 2022 (periodo denunciado por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor), ya que a la fecha de su inscripción como acreedora, ya habían pasado los meses que se debían reportar. En consecuencia, no se ha acreditado la comisión de la infracción tipificada en el artículo 12-B literal d) en relación al artículo 6, ambos de la LCU, siendo procedente *absolver* a la proveedora denunciada.

VII. DECISIÓN

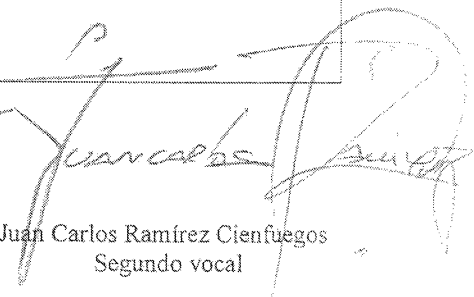
Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 11,

14, 101 inciso 2° de la Constitución de la República; 3, 6, y 12 de la LCU; 78 inciso tercero, 139 y 154 de la LPA; y 49 de la LPC, este Tribunal **RESUELVE**:

- a) ***Absuélvase*** a la proveedora Megavalores, S.A. de C.V., por la supuesta comisión de la infracción regulada en el artículo 12-B literal d) en relación al artículo 6, ambos de la LCU, en relación a la denuncia presentada por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor.
- b) ***Hágase del conocimiento de los intervinientes*** que, en cumplimiento al artículo 104 de la LPA, la presente resolución, al ser emitida en un procedimiento simplificado, no admite recurso de reconsideración, de conformidad con lo expuesto en el artículo 158 N° 5 de la LPA.
- c) ***Notifíquese.***


José Leisick Castro
Presidente


Pablo José Zelaya Meléndez
Primer vocal


Juan Carlos Ramírez Cienfuegos
Segundo vocal

PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LA SUSCRIBEN.

FJ/MIP


Secretario del Tribunal Sancionador